



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ D.C.

Bogotá D.C., dieciséis (16) de noviembre de dos mil dieciocho (2018)

RADICACIÓN: 11001-33-35-026-2018-00114
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
ACTOR: OSCAR EDWIN GÓMEZ VÁSQUEZ
OPOSITOR: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-
EJÉRCITO NACIONAL

En el presente asunto, **OSCAR EDWIN GÓMEZ VÁSQUEZ**, promueve demanda en contra del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL**, con la finalidad de que se declare la nulidad del acto administrativo, en el que se resolvió NO CONVOCAR al accionante, al curso de ESTADO MAYOR CEM-CIM-2018.

Pues bien, analizado el escrito introductorio, este despacho observa que, en este momento, no es posible dar trámite a la demanda presentada, teniendo en cuenta las siguientes,

CONSIDERACIONES

El Capítulo III de la Ley 1437 de 2011, consagra los requisitos que deben reunir las demandas, y para el efecto el artículo 162 dispuso:

“Artículo 162 Contenido de la Demanda. Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y contendrá:

1. *La designación de las partes y sus representantes.*
2. *Lo que se pretenda, expresando con precisión y claridad. Las varias pretensiones se formularán por separado, con observancia de lo dispuesto en este mismo Código para la acumulación de pretensiones.*
3. *Los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados.*
4. *Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación.*
5. *La petición de las pruebas que el demandante pretende hacer valer. En todo caso, este deberá aportar todas las documentales que se encuentren en su poder.*
6. *La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia.*

7. *El lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda recibirán las notificaciones personales. Para tal efecto, podrán indicar también su dirección electrónica.*

Así mismo, el artículo 166 ibídem, señaló que la demanda debe venir acompañada, entre otros, de la copia del acto acusado, con las constancias de su publicación, comunicación, notificación o ejecución, de los documentos y pruebas anticipadas que se pretenda hacer valer y que se encuentren en poder del demandante, y las copias de la demanda y de sus anexos para la notificación a las partes y al Ministerio Público.

Dicho precepto debe entenderse concordante con el art. 612 del Código General del Proceso, que modificó el artículo 199 de la Ley 1437 de 2011.

Visto esto y al realizar una revisión de tales requisitos, se pudo establecer que la demanda y los anexos, no cumplen con la totalidad de los mismos, como se indica a continuación:

1. De la individualización de los actos administrativos

El artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, señala el contenido indispensable de una demanda, refiriéndose en el numeral 2º a las pretensiones dentro del medio de control, preceptuando lo siguiente:

“Artículo 162 Contenido de la Demanda. *Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y contendrá:*

2. Lo que se pretenda, expresando con precisión y claridad. *Las varias pretensiones se formularán por separado, con observancia de lo dispuesto en este mismo Código para la acumulación de pretensiones. (...)*

Por su parte el artículo 163, de la misma Ley, consagra:

“Artículo 163. Individualización de las pretensiones. *Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo este se debe individualizar con toda precisión.* *Si el acto fue objeto de recursos ante la administración se entenderán demandados los actos que los resolvieron.*

Cuando se pretendan declaraciones o condenas diferentes de la declaración de nulidad de un acto, deberán enunciarse clara y separadamente en la demanda.”

(Subrayas y negrillas del despacho).

Ahora bien, una vez revisado el escrito de demanda, encuentra el Despacho, que la parte actora, tiene como pretensión primera la siguiente:

“PRIMERA.- Que se DECLARE la nulidad de la decisión de NO CONVOCAR al Mayor OSCAR EDWIN GÓMEZ VÁSQUEZ, AL CURSO DE ESTADO MAYOR CEM-2018, requisito reglamentario para ascender al grado de Teniente Coronel, emitida por el Comando del Ejército Nacional, acto que fuera notificado de manera pública en el

*Auditorio del Comando de Personal el pasado **5 de octubre de 2017**, y que fuera adoptado por el Comando del Ejército acogiendo la recomendación del Comité de Evaluación del Ejército Nacional, contenida en el **Acta No 99049 del 02 de Octubre de 2017**; reiterado según se refiere en el **HR No. 20173055141283 del 25 de octubre de 2017**, por ese mismo Comité, mediante el **ACTA No 4346 del 20 de octubre de 2017**, en respuesta a la solicitud de reconsideración que el Oficial impetró ante el Comando del Ejército.”¹*

Pues bien, analizada la pretensión primera del escrito de demanda, en la que se pretende la nulidad de varios actos administrativos, encuentra el Despacho, que no hay precisión, ni claridad en la individualización de los actos administrativos objeto del presente medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Así mismo, se denotan falencias en la redacción de la pretensión y en el orden cronológico de los actos administrativos descritos.

Corolario de lo anterior, desde ya, este Despacho conmina al apoderado judicial de la parte actora, para que en el escrito de subsanación de la demanda, formule nuevamente la pretensión primera, haciendo énfasis e individualizando, los actos administrativos objeto del medio de control.

Así mismo, deberá modificar el poder especial conferido por el demandante, para que se encuentre acorde a las pretensiones y objeto de la demanda.

2. De la estimación razonada de la cuantía

El artículo 155 de la Ley 1437 de 2011, señala los asuntos sobre los cuales tienen competencia los Juzgados Administrativos en primera instancia, refiriéndose en el numeral 2º, específicamente a los de carácter laboral, preceptuando lo siguiente:

“ARTÍCULO 155. COMPETENCIA DE LOS JUECES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA. Los jueces administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

(...)

2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía no exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.”

Adicionalmente al definir nuestro legislador la competencia en razón de la cuantía determino unas condiciones especiales para su fijación, en efecto establece la norma:

“ARTÍCULO 157. COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA. <Ver Notas de Vigencia> Para efectos de competencia, cuando sea del caso, la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que estos últimos sean los únicos que se

¹ Folio 88 del plenario.

reclamen. En asuntos de carácter tributario, la cuantía se establecerá por el valor de la suma discutida por concepto de impuestos, tasas, contribuciones y sanciones.

Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor.

En las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho no podrá prescindirse de la estimación razonada de la cuantía, so pretexto de renunciar al restablecimiento.

La cuantía se determinará por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad a la presentación de aquella.

Cuando se reclame el pago de prestaciones periódicas de término indefinido, como pensiones, la cuantía se determinará por el valor de lo que se pretenda por tal concepto desde cuando se causaron y hasta la presentación de la demanda, sin pasar de tres (3) años.”

Pues bien, la apoderada de la parte actora, al realizar los planteamientos en torno a la fijación de la cuantía, determina lo siguiente:

“(…) En el presente caso, mi representado sufrió daño moral como consecuencia de la expedición del acto administrativo viciado de nulidad, que le negó el derecho a ingresar al Curso de Estado Mayor, curso de ascenso reglamentario para ascender al grado de Teniente Coronel, el cual implicaba unas mejores condiciones personales, profesionales y salariales, los cuales deben ser reparados por la Entidad causante del mismo.

*En consecuencia, la cuantía razonada solo puede tener relación con los perjuicios morales que se le han causado a mi representado con la expedición del acto administrativo que será objeto del medio de control, la cual estimo en una cuantía equivalente a CUARENTA (40) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES esto es la suma de TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS (\$31.249.680,00)
(…)”²*

De acuerdo a lo anterior, observa el Despacho, que en primer lugar, la cuantía estimada por la parte actora (\$31.249.680,00), no se realizó de acuerdo a los lineamientos trazados por la ley, sin determinar dicho presupuesto procesal razonadamente, tazándolas de manera general, y sin haber realizado las operaciones aritméticas que soporten el reclamo del pago de los valores presuntamente adeudados; y en segundo lugar, la cuantía se estimo en razón al ***“daño moral como consecuencia de la expedición del acto administrativo”***, en contravía, de lo preceptuado en el artículo 157 del CPACA, en el que se preceptúa, que la cuantía deberá calcularse desde cuando se causaron los derechos y hasta la presentación de la demanda sin que supere los tres años, ***y sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios***, que causen con posterioridad a la presentación de la demanda.

² Folio 7 del plenario.

Por consiguiente, la demanda presentada por la apoderada judicial de la actora, no será admitida hasta tanto no sea presentada en debida forma y bajo los lineamientos de la Ley 1437 del 2011, 1450 del 2011 y 1564 del 2012, normas vigentes en materia Contenciosa Administrativa.

Por lo expuesto, el Despacho,


RESUELVE

PRIMERO.- INADMITIR LA DEMANDA promovida por el señor **OSCAR EDWIN GÓMEZ VÁSQUEZ**, en contra del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL**.



SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior, se concede a la parte demandante el término perentorio de diez (10) días, con el fin que subsane los defectos señalados en la parte motiva de este proveído, so pena de rechazarse la demanda, al tenor de lo dispuesto en el artículo 170 del C.P.A.C.A.

Finalmente, es del caso señalar, que también se deberá allegar en medio magnético la subsanación que se realice en los términos indicados a lo largo de este proveído.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.


ANDRÉS JOSÉ QUINTERO GNECCO
Juez

CA

 JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. Por anotación en ESTADO ORDINARIO notifico a las partes la providencia anterior hoy 19 DE NOVIEMBRE DE 2018 , a las ocho de la mañana (8:00 a.m.)  LIZZETH VIVIANA CANGREJO SILVA SECRETARIA
--

